



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

MEDIO DE CONTROL: Ejecutivo
DEMANDANTE: Siervo Tulio Uribe Rodríguez
DEMANDADO: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP
RADICACIÓN: 15 0013333015-2016-00033-00

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de embargo y retención de dineros que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP posee en los bancos de Bogotá, Popular, Bancolombia, BBVA, Colpatria, Caja Social y Davivienda.

CONSIDERACIONES

1. La Ley 1437 de 2011 para efecto de los procesos ejecutivos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no estableció un procedimiento especial, razón por la cual, de acuerdo con la remisión normativa del artículo 306 *ejusdem*, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso. En este orden, las medidas cautelares en los juicios ejecutivos seguidos ante esta Jurisdicción se entienden reguladas por este cuerpo normativo.

Respecto al decreto de medidas cautelares de embargo en procesos ejecutivos, el Código General del Proceso en su artículo 599 señala:

“Art. 599.- Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(...)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o venalidad (...).”

Con relación al procedimiento para el decreto de embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios, el artículo 593 *ibídem* establece lo siguiente:

“Art. 593.- Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:

(...)

10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso 1º del numeral 4º, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento (50%). Aquéllos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.”

2. De otra parte, en lo que concierne al decreto de medidas cautelares sobre bienes inembargables, el parágrafo del artículo 594 *ejusdem* refiere las excepciones al principio de inembargabilidad, así:

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables.

En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos.

En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo.

En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

De acuerdo a lo anterior, mediante este texto legal se incorpora a la ley formal, el criterio jurisprudencial según el cual, la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta, en tanto admite unas excepciones derivadas del mismo ordenamiento jurídico.

3. La medida cautelar es solicitada por el apoderado de la parte ejecutante por los valores aprobados en liquidaciones de crédito y de costas procesales, que para el caso concreto corresponden a los valores aprobados según autos de 23 de marzo y 25 de mayo de 2017, respectivamente (fls. 273-274 y 278).

Es decir, la suma a embargar corresponde a los intereses moratorios causados respecto al cumplimiento de la sentencia que sirvió de título ejecutivo entre el 12 de septiembre de 2007 y el 25 de septiembre de 2009¹, más la suma de \$470.848 correspondiente a la liquidación de costas y gastos ordinarios del proceso aprobados por el Despacho.

4. Para efecto de verificar la existencia y precisar la naturaleza de los bienes sobre los que se pretende el embargo, el Despacho requirió a las entidades financieras señaladas por el ejecutante para que suministraran información de los productos financieros de los que fuera titular la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, y pudo precisar los siguientes aspectos:

- En cumplimiento de la orden judicial, el Banco Popular a través del oficio N° 003990 del 4 de enero de 2019 (fl. 37), certificó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- con NIT. 900.373.913-4, es titular de los siguientes productos:

- 110-026-00137-0 GASTOS DE PERSONAL
- 110-026-00138-8 GASTOS GENERALES
- 110-026-00140-4 CAJA MENOR
- 110-026-00169-3 SENTENCIAS Y DEPOSITOS
- 110-026-00168-5 DIRECCIÓN PARAFISCALES – PAGOS DE LA PLANILLA U PILA

A esta respuesta fue adjuntada copia de la constancia enviada por la Subdirectora Financiera de la UGPP de 17 de marzo de 2017, en la cual expuso que los dineros

¹ Suma que asciende a \$ 8.926.960.

manejados en esas cuentas no están destinados al pago de prestaciones económicas, porque esas son asumidas directamente por el FOPEP (fls 38-39).

- Los bancos BBVA, Davivienda, Caja Social, Colpatria y Bancolombia informaron que la entidad ejecutada no figura como titular de productos financieros en esas entidades (fs. 32-36).

5. Preciado lo anterior, comoquiera que en el presente asunto se pretende determinar si los recursos administrados por la entidad ejecutada pueden ser objeto de medidas cautelares, el Despacho acudirá al numeral 1° del artículo 594 del CGP que relaciona los bienes inembargables, así:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

*1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.
(...)”*

Adicionalmente, debe considerarse que esta última norma ratifica lo establecido en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, que otorgó el carácter de inembargable a los recursos de la Seguridad Social, es decir, los de salud, pensiones y riesgos profesionales.

Al respecto, en Sentencia C-543 de 2013, la Corte Constitucional reiteró que estas normas debían ser interpretadas de manera armónica y con integridad del ordenamiento jurídico, lo que obliga a armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, tales como la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo, y de los que se han inferido excepciones a la regla general de inembargabilidad² como son los siguientes:

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas³.
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos⁴.

² La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

³ C-546 de 1992

⁴ En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Preciso que tratándose de los

- 45
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.⁵
 - (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto a los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)⁶

De otra parte, en providencia de 21 de julio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió una petición de medida cautelar, consistente en el embargo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y precisó que tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, prevén que la regla de inembargabilidad de los recursos públicos, debe ceder ante la satisfacción de obligaciones de estirpe laboral, contenidas en una sentencia judicial, eventos en los cuales se puede acudir ante el juez administrativo para perseguir su pago, siempre y cuando la deudora no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos, en los términos de los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda.

En efecto, el Consejo de Estado señaló:

*"(...) En suma, tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, **no obstante el principio de inembargabilidad de los recursos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho, su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencias judiciales o constan en títulos emanados de la Administración.***

Por ello, en el evento de acudir ante un juez de la República para perseguir el pago de esa gama de créditos, los recursos del presupuesto general podrán sustraerse del patrimonio de la Nación, en igual medida a otros bienes preliminarmente inembargables, cuando la entidad deudora no haya adoptado las medidas necesarias para satisfacerlos en los términos de los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda, salvo cuando el crédito sea

créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

⁵ La sentencia C-103 de 1994 'Jorge Arango Mejía', se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

⁶ C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño

de naturaleza contractual, caso en el que se aplicarán los términos del contrato (...).

*En conclusión, frente a eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, así como aquellos derivados de contratos estatales y los reconocidos en fallos judiciales, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde su supremacía, pues su afectación es necesaria para hacer efectivos otros principios de orden fundamental como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado (...)*⁷

De igual forma, en cuanto a la aplicación del principio de inembargabilidad, en providencia del 23 de noviembre de 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que el mismo amparaba los bienes, las rentas y los derechos que componen el Presupuesto General de la Nación, particularmente, en el escenario de incumplimiento de una sentencia judicial, así:

*"(...)Como se ve, si bien el principio de inembargabilidad ampara los bienes, las rentas y los derechos que componen el presupuesto general de la Nación, el mismo no es una garantía de aplicación incondicional y absoluta, pues, **cuando el juez observe que el funcionario competente no desplegó las conductas tendientes a pagar una sentencia dentro del plazo legal establecido para tal efecto, bien puede decretar las órdenes de embargo que considere necesarias conforme a la ley para garantizar el respeto por los derechos reconocidos a terceros en la respectiva sentencia (..)**.*

*No se pierde de vista que el escenario al que alude el decreto 111 de 1996 es el de las sentencias proferidas por un juez de lo contencioso administrativo, pues es el único facultado por la Constitución y la ley para imponer condenas al Estado, **de ahí que la excepción al principio de inembargabilidad sólo se pueda entender respecto de las sentencias proferidas por dicha jurisdicción**, sin perjuicio de las proferidas por órganos internacionales, en los procesos de responsabilidad del Estado colombiano, caso en el cual se seguirá lo consagrado en la ley 288 de 1996⁸ (...)* ⁹

⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B. Exp.: 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Consejero Sustanciador: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Medio de control: Proceso ejecutivo.

⁸ En este evento, no basta la existencia de la respectiva sentencia proferida por un órgano internacional de derechos humanos para hacer ejecutables las obligaciones que de ella se deriven, pues para tal efecto, es necesario que en el ámbito interno, se haya celebrado un acuerdo conciliatorio entre el Gobierno Nacional y los beneficiarios de la respectiva condena, aprobado por el Tribunal Administrativo competente, o que, en su defecto, exista una providencia expedida por esta última autoridad judicial, mediante la cual se haya decidido sobre la liquidación de perjuicios, por la vía incidental, como lo consagra el artículo 1º, 7, 8 y 11 de la ley 288 de 1996.

⁹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 88001-23-31-000-2001-00028-01(58870)

Este criterio fue reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2017 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sede de tutela, al señalar la obligatoriedad del precedente fijado por la Corte Constitucional, en tratándose de la aplicabilidad de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos:

*"(...) De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala considera que el Juzgado al denegar el embargo de los dineros depositados en la cuenta de Fondos Especiales, los cuales hacen parte del presupuesto general de la Nación, para respaldar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, no sólo **desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones**, sino que también incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 594 del CGP, lo que implica la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.*

Lo anterior, habida cuenta de que como se ha insistido a lo largo de esta sentencia, la prohibición de embargo de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, la cual ha indicado de manera reiterada, pacífica y uniforme cómo deben ser interpretadas las disposiciones que contienen esta regla y ha fijado las excepciones a la misma.

La Sala destaca que el hecho de que el aludido principio fuese incluido nuevamente en el CGP y el CPACA, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el CPC y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, **máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, que no es otro que el de ordenar la prohibición de embargar las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, cuya existencia en el ordenamiento jurídico está condicionada a la interpretación que ha hecho la Corte y que, conforme se afirmó en la sentencia C-543 de 2013, siguen vigentes e incluso deben ser atendidas por los operadores judiciales para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, aunado a que esta última disposición permite invocar excepciones a la regla general siempre y cuando estén contenidas en la ley (...) ¹⁰**".

¹⁰ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01532-01(AC)

Adicionalmente, con soporte en esos precedentes jurisprudenciales, en auto del 25 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó la viabilidad del embargo de recursos públicos, aun de los integrados en el Presupuesto General de la Nación *“cuando tal determinación sea necesaria a efectos de satisfacer ciertas obligaciones, particularmente cuando éstas son i) de contenido laboral, ii) se derivan de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando el ejecutado no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del CPACA o 177 del CCA o, iii) consten en títulos emanados de la administración.”*¹¹

Así, en estos eventos se consideró que el principio de inembargabilidad de los recursos del Estado debía ceder, pues, las entidades estatales habrían desconocido las previsiones legales que les imponían el cumplimiento de las providencias judiciales y actos administrativos, por los cuales se reconocen acreencias laborales.

6. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que se ordenó seguir adelante con la ejecución, teniendo como título la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso N° 150002331000-2003-00325-00¹², y que el mandamiento de pago se libró con el fin de obtener el pago de los intereses moratorios faltantes causados entre el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y la fecha del pago total del capital adeudado.

Con base en lo anterior, habida cuenta que la solicitud de la medida cautelar de embargo de las cuentas de UGPP tiene como finalidad materializar el cumplimiento de una sentencia proferida por esta jurisdicción, considera el Despacho que se encuentra ante un presupuesto de excepción al principio de inembargabilidad de recursos públicos, en el que debe materializarse el cumplimiento de providencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones, por lo resulta procedente acceder al decreto de tal medida.

En tal sentido, teniendo en cuenta que en el *sub lite* se libró mandamiento de pago¹³, se ordenó seguir adelante con la ejecución¹⁴ y fueron aprobadas liquidaciones del crédito y costas¹⁵, sin que la entidad haya realizado el correspondiente pago, encuentra el Despacho que procesalmente no existe otro mecanismo diferente para asegurar el pago de lo adeudado al accionante que el decreto de medidas cautelar para el recaudo forzado del crédito consolidado en favor del ejecutante.

¹¹ Dentro del Proceso Ejecutivo No. 15001 333 011 2015 00105-01 iniciado por Beatriz López Porras contra el Ministerio de Educación- FNPSM, con ponencia del Magistrado Oscar Alfonso Granados Naranjo.

¹² Proceso seguido en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en la que se ordenó a Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL reliquidar la pensión de jubilación de Siervo Tulio Uribe Rodríguez (ffls. 17-26).

¹³ Folios 104 a 111

¹⁴ Folios 242 a 251

¹⁵ Folios 273-274 y 278, respectivamente.

Contrariamente, la negativa de la medida solicitada por el ejecutante en este estadio del trámite procesal, implicaría dejarlo sin mecanismos para lograr el cumplimiento de la obligación por parte de la entidad ejecutada, negar la materialización del derecho y poner en duda el cumplimiento de las decisiones judiciales, cuando las mismas involucran a entidades estatales.

Por lo expuesto, la medida de embargo recaerá sobre los recursos consignados depositados en la cuenta corriente número 110-026-00169-3, de la cual es titular la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- con NIT 900.373.913-4, del Banco Popular, denominada “Sentencias y Depósitos”, tal como puede derivarse de la certificación que obra a folio 34 del cuaderno de medida cautelar. Para la efectividad de la medida se dispondrá que por Secretaría se oficie al gerente del Banco Popular, a fin de que se sirva retener los dineros allí depositados y ponerlos a disposición de este juzgado en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, a favor de la demandante Siervo Tulio Uribe Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.750.774 expedida en Tunja

Secretaría comunicará esta decisión a la entidad financiera Banco Popular, advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida le hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

En cuanto al monto a recaudar, deberá aplicarse lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 599 del CGP, en el sentido de limitar el monto del embargo “a lo necesario”; para ello deberá considerarse la suma por la cual se dispuso seguir adelante con la ejecución – correspondiente exclusivamente a intereses adeudados por el cumplimiento tardío del fallo judicial– no está sujeta a incrementos futuros, que junto con las costas y gastos reconocidos en esta ejecución asciende a \$9.397.808¹⁶ suma que se fijará como límite de la medida.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE

16

Resumen liquidación aprobadas	
(-) Intereses moratorios	\$ 8.926.960.
(+) Costas	\$ 470.848
TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 9.397.808

PRIMERO.- Decretar el embargo y retención de los dineros que se encuentren en la cuenta corriente N° 110-026-00169-3 “sentencias y depósitos” del Banco Popular, de las que es titular la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, identificada con NIT 900.373.913-4.

SEGUNDO.- Limitar el monto del embargo a la suma de nueve millones trescientos noventa y siete mil ochocientos ocho pesos (\$9.397.808).

TERCERO: Por Secretaría oficial al gerente del Banco Popular, a fin de que se sirva retener los dineros depositados en la cuenta corriente N° 110-026-00169-3 “sentencias y depósitos”, hasta por el valor de nueve millones trescientos noventa y siete mil ochocientos ocho pesos (\$9.397.808)., y ponerlos a disposición del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, depositándolos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, en favor de la demandante Siervo Tulio Uribe Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.750.774 expedida en Tunja.

Secretaría comunicará esta decisión a la entidad financiera Banco Popular, advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida le hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

CUARTO: Por Secretaría **dar** cumplimiento inmediato a ésta medida antes de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 del CGP.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

17 Cesco

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° 13 De Hoy 5 de abril de 2019 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

¹⁷ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 5 de abril de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández Secretario